

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Correo Argentino Suc. 43 (B) | FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420 |
| | TARIFA REDUCIDA Concesión N° 4033 |

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
SECRETARIA PARLAMENTARIA
DIRECCION SECRETARIA
MESA DE ENTRADAS

TRAMITE PARLAMENTARIO N° 248

MÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 1991

SUMARIO

I

PODER EJECUTIVO

- 1.—Mensaje 632 y proyecto de ley de administración financiera y control de gestión del sector público nacional (83-P.E.-90). (Presupuesto y Hacienda.) (Pág. 7232.)

II

SENADO

- 2.—(C. D.-J. P.-31/91.) Comunica la resolución aprobada por la Honorable Cámara de Senadores relacionada con el procedimiento de juicio político promovido al señor juez nacional de primera instancia en lo civil de la Capital Federal, doctor Alberto Oscar Nicosia (221-S.-90). (Juicio Político.) (Pág. 7252.)

III

DIPUTADOS

- 3.—Estévez Boero y otros: de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la privatización de sectores del sistema hospitalario municipal (6.278-D-90). (Asuntos Municipales y de los Territorios Nacionales y Asistencia Social y Salud Pública.) (Pág. 7253.)
- 4.—Felgueras: de declaración. Expresar beneplácito por la inauguración de la Universidad de Cine, proyectada por el cineasta Manuel Antín, a producirse el 2 de mayo de 1991 (6.279-D-90). (Educación.) (Pág. 7254.)

- 5.—González (O. F.) y otros: de declaración. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga modificar los alcances del decreto 2.733 del 28 de diciembre de 1990, que afecta la constitución del Fondo Permanente para el Fomento de la Aviación Civil, y otras cuestiones conexas (6.281-D-90). (Transportes.) (Página 7254.)
- 6.—Bisciotti: de declaración. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga aportar los fondos que posibiliten completar la incorporación de los conscriptos de la clase 1972 (6.282-D-90). (Defensa Nacional.) (Página 7255.)
- 7.—Machicote: de ley. Incorporación de un nuevo artículo a la ley 23.771 sobre régimen penal tributario y previsional (6.283-D-90). (Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social.) (Pág. 7256.)
- 8.—Parrilli y otros: de ley. Creación del régimen especial de exportaciones para la zona de frontera de bienes cultivados, extraídos o producidos en la misma (6.284-D-90). (Economía, Comercio y Presupuesto y Hacienda.) (Pág. 7257.)
- 9.—Mugnolo: de ley. Modificaciones a la ley 20.744 y sus modificaciones, de contrato de trabajo (6.285-D-90). (Legislación del Trabajo.) (Pág. 7261.)
- 10.—Manrique y Parrilli: de ley. Régimen para grupos autogestionarios de construcción de viviendas únicas para uso familiar de cada uno de sus integrantes (6.289-D-90). (Vivienda y Finanzas.) (Página 7266.)
- 11.—Socchi: de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el detalle completo de los bienes que componían la Unidad Operativa de Aerotransporte (UOA) cuyo titular, ARSE, transfirió a ARSA (6.290-D-90). (Transportes.) (Pág. 7267.)

- 12.—**Garay y otros:** de ley. Modificaciones a las leyes 21.521 y 19.349 sobre las funciones de seguridad y judiciales en los aeropuertos del país (6.291-D.-90). (Defensa Nacional, Legislación Penal y Transportes.) (Pág. 7268.)
- 13.—**Cruchaga y otros:** de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la adjudicación a Ferrocarril Pampeano S. A. del ramal ferroviario Rosario-Bahía Blanca (6.292-D.-90). (Transportes.) (Pág. 7270.)
- 14.—**Gentile y otros:** de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la decisión de eliminar el servicio del "Tren de las Nubes", perteneciente al Ferrocarril General Belgrano en las provincia de Salta (6.294-D.-90). (Transportes.) (Pág. 7270.)
- 15.—**Gentile y otros:** de resolución. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga se adopten las medidas tendientes a solucionar el conflicto laboral mantenido por el sindicato de empleados públicos y el gobierno de la provincia de Córdoba (6.295-D.-90). (Legislación del Trabajo.) (Pág. 7271.)
- 16.—**Bordín Carosio:** de ley. Organización como sociedades anónimas de las empresas del Estado sujetas a privatización, y otras cuestiones conexas (6.296-D.-90). (Obras Públicas y Presupuesto y Hacienda.) (Página 7272.)
- 17.—**Gentile y otros:** de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con las gestiones realizadas por nuestro país sobre la utilización de las armas químicas, conforme a la declaración final de la Conferencia de Estados Partes del Protocolo de Ginebra de 1925, y otras cuestiones conexas (6.297-D.-90). (Relaciones Exteriores y Culto.) (Pág. 7273.)
- 18.—**Gentile y otros:** de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre los servicios y gastos de las oficinas del interior del país, pertenecientes a la Dirección Nacional de Migraciones (6.298-D.-90). (Agricultura y Ganadería.) (Pág. 7274.)
- 19.—**Gentile y otros:** de declaración. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga gestionar ante la República Federativa del Brasil, la modificación de la instrumentación de la integración y cooperación, entre ambos países (6.300-D.-90). (Relaciones Exteriores y Culto.) (Pág. 7275.)
- 20.—**Gentile y otros:** de declaración. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga se establezcan oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones en distintas ciudades de la provincia de Córdoba (6.301-D.-90). (Agricultura y Ganadería.) (Pág. 7276.)
- 21.—**Gentile y otros:** de declaración. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga que los subsidios destinados a las escuelas privadas sean tramitados con la misma urgencia que los sueldos otorgados al personal de escuelas estatales (6.302-D.-90). (Educación.) (Página 7276.)
- 22.—**Gentile y otros:** de ley. Modificaciones de la ley 20.007, sobre subsidios a víctimas de hechos terroristas (6.303-D.-90). (Asistencia Social y Salud Pública —especializada— y Presupuesto y Hacienda.) (Pág. 7276.)
- 23.—**Gentile y otros:** de ley. Creación de la Cámara Federal de Apelaciones y de un juzgado federal de primera instancia en la provincia de Santiago del Estero con sede en la ciudad capital de dicha provincia (6.304-D.-90). (Justicia —especializada— y Presupuesto y Hacienda.) (Pág. 7277.)
- 24.—**Gentile y otros:** de ley. Sustitución del artículo 93 de la ley 22.439, general de migraciones y de fomento de la inmigración (6.305-D.-90). (Agricultura y Ganadería.) (Pág. 7278.)
- 25.—**Gentile y otros:** de ley. Sustitución de los artículos 3º y 4º de la ley 11.601, sobre el funcionamiento de la Imprenta del Congreso de la Nación (6.306-D.-90). (Legislación General.) (Pág. 7278.)
- 26.—**Bassani:** de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el derrame de 2.000 litros de benceno producido en el paraje "Cuatro Bocas", del puerto de La Plata, y otras cuestiones conexas (6.307-D.-90). (Energía y Combustibles y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.) (Pág. 7279.)
- 27.—**Marcó y otros:** de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre los motivos de la reimplantación del pago de peaje (6.308-D.-90). (Transportes.) (Pág. 7280.)
- 28.—**Storani (C. H.):** de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre los acontecimientos producidos en la zona fronteriza de "Laguna del Desierto", en la provincia de Santa Cruz (6.309-D.-90). (Relaciones Exteriores y Culto.) (Pág. 7280.)

I

PODER EJECUTIVO

1

Buenos Aires, 12 de abril de 1991.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración el proyecto de Ley de Administración Financiera y Control de Gestión del Sector Público Nacional.

Los aspectos más importantes del proyecto son los siguientes:

1. Antecedentes

La actual Ley de Contabilidad (decreto ley 23.354/56), regula los sistemas de presupuesto, tesorería, contrataciones, gestión de bienes del Estado, contabili-

dad y controles interno y externo. Esta ley ha cumplido un rol fundamental en la organización del Estado nacional y, en su momento, colocó a la Argentina en la vanguardia de los países latinoamericanos en materia de administración financiera y control gubernamental.

No obstante lo anterior en la actualidad esta ley no cumple a cabalidad sus objetivos iniciales, entre otras por las siguientes razones:

a) Las rigideces de sus normas no se compatibilizan con las modernas tecnologías administrativas ni con la actual realidad de la estructura organizativa del sector público nacional, producto de una especial dinámica de crecimiento motivada por los sucesivos roles que se le fueron asignando al Estado, en forma posterior a su puesta en vigencia;

b) Sus rigideces han alentado a que se establecieran regímenes que exceptuaban a entidades del cumplimiento de sus normas, encontrándose en esta situación buena parte de las actuales empresas y sociedades del Estado. Por otra parte es de destacar que en su concepción la ley no contempla todos los mecanismos necesarios para asegurar la efectiva interrelación de los sistemas que componen la administración financiera y su vinculación con los de control lo que afecta la efectividad y eficiencia de las operaciones que regula.

Adicionalmente a lo anterior, en los últimos años se ha venido produciendo un sensible deterioro de la administración financiera, cuyas manifestaciones más notables son las siguientes:

a) Presentación y aprobación extemporánea de los presupuestos de la administración nacional, lo que ha afectado el proceso de administración de dicho presupuesto. Por otra parte se han desarrollado regímenes presupuestarios especiales para las empresas y sociedades del Estado desvinculadas del órgano de presupuesto de la administración central;

b) La no existencia de normas sistematizadas de crédito público y la proliferación de operaciones de endeudamiento, fundamentalmente en la década de los setenta (70), han originado una gran debilidad en la administración de este sistema y en la disponibilidad de la respectiva información;

c) El actual órgano responsable del sistema de tesorería de la administración central, se ha transformado en la práctica en una caja pagadora, cumpliendo muy limitadas funciones en lo que refiere a aspectos monetarios y financieros del sector público nacional;

d) La actividad contable central no ha integrado adecuadamente las distintas ramas que la conforman y se ha concentrado básicamente en brindar información que posibilite el control legal del uso de los recursos y en la elaboración de la cuenta general del ejercicio. Dicha cuenta es presentada al Congreso con significativos atrasos y éste a su vez no la ha analizado exhaustivamente en los últimos años. Por otra parte este sistema no está generando información oportuna sobre la gestión financiera pública, lo que ha originado el desarrollo de metodologías ad hoc producto de los requerimientos de las autoridades responsables de administrar las finanzas públicas nacionales.

A todo este cuadro de situación de la administración financiera, debe añadirse el deterioro que ha causado al sistema de programación y procesamiento de dicha información, el fenómeno de la inflación, agudizado por la hiperinflación, que ha impactado durante las últimas décadas en la sociedad argentina.

Por último, el sistema de control de la gestión pública ha sido condicionado por pautas y principios disímiles ejecutados por diversos organismos de control. Lo anterior le ha quitado al sistema coherencia y organicidad, y no ha sido lo suficientemente eficiente en la lucha contra la corrupción ni ha representado una ayuda importante para la dirección de los niveles superiores de las jurisdicciones y entidades públicas.

2. Concepción del proyecto

2.1 Aspectos básicos

El proyecto contiene una normativa que tiene por finalidad otorgarle racionalidad a la administración financiera del sector público nacional e instituir una estructura de controles internos y externos de carácter financiero y operativo sobre la gestión de los entes públicos.

Las disposiciones previstas en el proyecto motivarán un avance de grandes proporciones en el perfeccionamiento del sistema republicano de gobierno y en la consolidación de la práctica democrática en nuestro país. Será asimismo una nueva barrera para todas las diversas formas de corrupción que, al amparo de la crisis económica, han proliferado en la sociedad argentina, atacando también al sector público. A su vez posibilitará que se tomen más transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos públicos en función de los objetivos y políticas definidas.

En la elaboración del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes premisas básicas:

a) Considera como ámbito de aplicación de las disposiciones que prevé, a todo el sector público nacional que, como se ha señalado en el tópico "Antecedentes", hoy no está íntegramente alcanzado por las normas que regulan la administración financiera y el control gubernamental;

b) Asigna una mayor participación al Congreso, tanto en términos de decisiones que debe adoptar en materia de presupuesto y endeudamiento público, como por la información que debe recibir para su conocimiento referida a la gestión económico-financiera del sector público. Por otro lado la creación de la Contraloría General de la Nación como órgano técnico de apoyo al Congreso, implica una mayor participación de este poder en el control de la gestión pública gubernamental;

c) Incorpora al sector público nacional los conocimientos más modernos en materia de tecnologías administrativas, administración financiera y control de gestión.

Cabe destacar que entre los países latinoamericanos que han reorganizado su administración financiera y régimen de control del sector público durante los úl-

timos años, con objetivos similares a los del presente proyecto, se encuentran Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México. Otros países como Canadá, Estados Unidos de América y España han desarrollado también novedosos esquemas en materia de información financiera y controles internos y externos, que el proyecto ha utilizado como antecedentes.

Por último, cabe señalar que en este proyecto no se contemplan normas referidas al régimen de contrataciones y de gestión de los bienes del Estado ya que dicha normativa será objeto de un proyecto que posteriormente será remitido a vuestra honorabilidad.

2.2 En materia de administración financiera

Actualmente a la administración financiera pública se la concibe como el conjunto de elementos administrativos que intervienen en las fases de programación, ejecución y evaluación de los procesos que hacen posible la obtención de recursos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Sobre la base de esta concepción el proyecto de ley plantea una administración financiera sustentada en los siguientes criterios:

- a) Su organización es de carácter sistémico y estará coordinada por un órgano que tendrá la responsabilidad de elaborar la política financiera del gobierno y supervisar la normatividad correspondiente;
- b) Los sistemas de presupuesto, crédito público, tesorería y contabilidad que la conforman están estrechamente interrelacionados en cuanto a su normatividad, operatividad e información que generan, sin desmedio de cada uno de ellos;
- c) La interrelación de los sistemas que la componen posibilita que en su operación se obtengan importantes economías de gestión;
- d) Su diseño e implantación posibilitará una administración eficiente de los escasos recursos públicos;
- e) El sistema asegurará la transparencia de la gestión financiera pública y, por ende, garantizará una mayor eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de control interno y externo, facilitando a su vez el acceso de la ciudadanía y sus representantes al conocimiento de las operaciones financieras que ejecuta el sector público nacional.

2.3. En materia de control

Los principios y criterios básicos, de los que derivan otros subsidiarios, en los que descansa el modelo de control incorporado en el proyecto son:

- a) El organismo que centralice el registro de las operaciones financieras del Estado no puede además, auditarlas;
- b) Es responsabilidad de la alta dirección o gerencia de la jurisdicción o entidad:
- i) El mantenimiento de un sistema contable adecuado para el registro de las actividades del ente.

- ii) Contar con un personal eficiente y calificado y en número adecuado a las responsabilidades que se le asignen.
- iii) El mantenimiento de un sistema de control interno integrado que incluya la práctica del control previo y la existencia de una unidad de auditoría interna como apoyo a la dirección y en función de servicio a la organización, situada adecuadamente en el organigrama institucional.
- iv) La adopción de procedimientos que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los programas, proyectos y operaciones, el cumplimiento de metas y la obtención de los resultados previstos por el gobierno nacional;

c) No se compadece con los modernos esquemas de administración financiera en el sector público la práctica del "control previo" por instituciones exógenas al propio organismo o repartición pública. El ejercicio del control previo se encuadra, como se ha indicado anteriormente, dentro de la "estructura de control interno", que es una de las responsabilidades que competen a la alta dirección de cada jurisdicción y entidad del sector público. Se trata de reconocer la función de "gerencia responsable, a tiempo completo", dentro de la cosa pública dejando aparte, por inadmisibles en la teoría y praxis de la administración pública en un Estado moderno, la continuación de criterios de control que fueron exportados a la región bajo la filosofía de control del sector público imperante inmediatamente antes y después de la crisis de los años treinta. Esto no significa que el gerente público esté exento del necesario control impuesto por el propio Ejecutivo nacional —control interno— y complementado por el control externo ejercido a través del Congreso, como corresponde a la división de poderes en una organización democrática del Estado;

d) Es recomendable la existencia de un organismo de control interno al servicio del Poder Ejecutivo nacional. El presidente de la Nación tiene el derecho a ser informado oportuna y fidedignamente para posibilitarle la adopción racional de las decisiones administrativas que le competen. Bajo el esquema propuesto, este organismo de control del Poder Ejecutivo nacional coordinaría la red de "unidades de auditoría interna" que se establecen en cada una de las jurisdicciones y entidades;

e) Es necesario la existencia de un órgano supremo de control que, situado en línea de dependencia técnica y financiera con el Congreso y dotado de la imprescindible independencia administrativa, técnica y financiera, efectúe el control *ex post* de la utilización de todos los recursos del Estado, la evaluación de la economía y eficiencia con que se desarrollen las actividades del sector público y los resultados que se obtengan con los grandes programas y proyectos de la Nación.

3. Contenido del proyecto

3.1. Disposiciones generales

Las disposiciones generales, como marco normativo básico del proyecto de ley de administración financiera y control de gestión del sector público nacional, contienen las definiciones y conceptos generales que sustentan y enmarcan las diversas normas contenidas en dicho proyecto.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

- a) Define la administración financiera y señala los alcances del régimen de control;
- b) Establece la organización sistémica de la administración financiera y del régimen de control e identifica sus sistemas componentes;
- c) Detalla los objetivos que se pretenden alcanzar a través de la ley;
- d) Establece la composición del sector público nacional a efectos de la ley;
- e) Define los conceptos de jurisdicción y entidad;
- f) Prevé la existencia, en el ámbito del Poder Ejecutivo, de un órgano coordinador de los sistemas de administración financiera del cual dependerán directamente los organismos rectores de cada uno de ellos. Estas responsabilidades que, de acuerdo con la actual Ley de Ministerios, le corresponden al Ministerio de Economía, deberán ser asignadas a uno de sus órganos dependientes por decreto del Poder Ejecutivo nacional.

3.2 Sistema presupuestario

Las modernas legislaciones en materia presupuestaria, en especial las últimas reformas legales en Latinoamérica, contemplan normas que cubren a todo el sector público y, a la vez, le otorgan al presupuesto un carácter que va mucho más allá de un instrumento legal que expresa una previsión financiera para un período determinado. El presupuesto es además, un instrumento básico de política económica, planificación y administración.

Tomando en consideración los criterios básicos anteriores, las normas que forman parte del proyecto de ley, presentan las siguientes características:

- a) Prevé la centralización normativa del sistema, a través de la definición de políticas presupuestarias para todo el sector público nacional y el establecimiento de normas comunes para dicho sector. Para la fijación de la política presupuestaria toma en consideración el programa monetario y el presupuesto de divisas, a efectos de lograr una adecuada compatibilización entre los tres instrumentos mencionados y, a la vez, otorgarle una mayor integralidad a dicha política;
- b) Considera las particularidades, tanto desde el punto de vista de la estructura técnica como del proceso presupuestario, de las empresas y sociedades del Estado, al dotarlas de una adecuada flexibilidad en su respectiva gestión, enmarcada dentro de las políticas generales definidas por el Poder Ejecutivo nacional;

c) Establece normas precisas para la presentación y aprobación en fecha oportuna de los presupuestos de la administración nacional y de las empresas y sociedades del Estado. Se trata, de esta manera, de racionalizar y sistematizar el proceso de formulación y aprobación de los presupuestos y evitar la práctica histórica en esta materia. Se centraliza en el Poder Ejecutivo nacional la aprobación de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, previo informe del órgano central del sistema presupuestario;

d) Lo anterior posibilita que en los primeros meses de cada año, el Congreso disponga del presupuesto consolidado del sector público, herramienta básica que permite expresar y medir los efectos netos previstos del ingreso y gasto público sobre la economía;

e) Redimensiona el rol del Congreso, pues además de aprobar el presupuesto de la administración nacional, conoce el presupuesto consolidado del sector público, el programa monetario y el presupuesto de divisas e interviene en la aprobación de ciertas modificaciones al presupuesto de la administración nacional;

f) Fija la etapa del gasto devengado como base contable para determinar los gastos, lo que posibilita relacionar las variables reales y financieras contenidas en el presupuesto y, por ende, evaluar en forma integral la gestión presupuestaria y sustentar la programación de ejercicios futuros. En el caso de las empresas y sociedades del Estado, el criterio del devengado se extiende al presupuesto de recursos;

g) Establece en forma precisa los mecanismos de cierre de cuentas de la administración nacional y la existencia de un sistema de evaluación de la ejecución presupuestaria para la misma;

h) Descentraliza la operatividad de la ejecución presupuestaria de la administración nacional, al definir un sistema de programación de la ejecución que posibilita la asignación de cuotas periódicas de gastos, por parte de los órganos rectores de los sistemas presupuestario y de tesorería, las que se deben compatibilizar con los flujos estacionales de ingreso;

i) Relaciona el sistema presupuestario con los otros sistemas de administración financiera, al establecer que:

- i) Forma parte de los presupuestos de recursos el financiamiento originado por endeudamiento (sistema de crédito público).
- ii) El órgano central de tesorería debe participar en la aprobación de la programación de ejecución (sistema de tesorería).
- iii) Se definen diversas etapas para el registro de los ingresos y gastos (sistema de contabilidad);

j) Explicita la organización del sistema, al definir a la oficina nacional de presupuesto como el órgano rector, dependiente del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera, y determinar que las unidades que cumplan las funciones presupuestarias están obligadas a cumplir las normas técnicas establecidas por el órgano rector y a velar por el cumplimiento de las políticas establecidas en esta materia.

3.3. Sistema de crédito público

La necesidad de sistematizar y controlar el endeudamiento público, para mantener su nivel en consonancia con la capacidad de las entidades para hacer frente al pago de los servicios respectivos, lleva al Poder Ejecutivo nacional a establecer en el proyecto de ley un sistema de crédito público, cuyas características fundamentales son:

a) Establece precisiones conceptuales que son fundamentales para realizar operaciones de crédito público, administrar su ejecución y atender sus servicios.

b) Identifica los distintos tipos de operaciones que originan la deuda pública.

c) Instituye que los créditos recibidos y que impliquen deuda pública, sólo pueden destinarse para:

i) Financiar inversiones reproductivas.

ii) Afrontar casos de evidente necesidad nacional.

iii) Reestructurar pasivos.

Se prohíbe expresamente realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes.

d) Señala las bases para organizar un sistema de información y de apoyo a las negociaciones de operaciones, con la finalidad de obtener préstamos o emitir empréstitos en las condiciones más ventajosas del mercado.

e) Centraliza en el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera, la autorización para iniciar trámites tendientes a la consecución de medios de financiamiento que originen deuda pública, lo que permite controlar que los nuevos endeudamientos se realicen acordes con la capacidad de pago del servicio respectivo por el sector público nacional.

f) Establece la participación del Banco Central de la República Argentina en las operaciones que originen deuda externa, lo que asegura una coordinación entre las proyecciones del presupuesto de divisas y el servicio de la deuda externa.

g) Crea una oficina nacional con la responsabilidad de administrar este sistema y de participar en la fijación de la política crediticia del sector público nacional.

h) Por último, y quizás sea lo más importante desde el punto de vista del resguardo del patrimonio público y de la transparencia de las operaciones, establece la participación del Congreso en todas las transacciones que impliquen endeudamiento directo o indirecto de la administración nacional.

3.4. Sistema de tesorería

Las disposiciones contenidas en el proyecto implican una profunda redefinición del papel y función de la Tesorería General de la Nación la que, además de sus tradicionales responsabilidades en materia de cobros y pagos, debe tener una participación decisiva en la definición e instrumentación de los aspectos monetarios de la política financiera del sector público nacional.

En ese contexto, el proyecto plantea un sistema que, teniendo a la Tesorería General de la Nación como órgano rector del mismo, le fija las siguientes responsabilidades:

a) Coordinar el funcionamiento de todas las tesorerías que operen en el sector público nacional, dictando normas y procedimientos al respecto, y supervisando su aplicación.

b) Aprobar, en conjunto con la oficina nacional de presupuesto, el ritmo de ejecución de los gastos y pagos de la administración nacional e individualmente establecer el flujo de fondos de la administración central.

c) Conformar los presupuestos de caja de los organismos descentralizados y supervisar su ejecución.

d) Emitir letras del Tesoro a objeto de financiar los déficit estacionales de caja, dentro de las limitaciones que fije la ley de presupuesto general y con la obligación de reembolsarlas dentro del ejercicio financiero.

e) Elaborar el presupuesto de caja del sector público nacional y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución, estableciendo políticas coordinadas con el Banco Central de la República Argentina, en relación a la administración de la liquidez que genera dicho sector.

f) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales que realizan las entidades en el mercado financiero, a fin de regular su incidencia en la política monetaria.

g) Establecer en el ámbito de la administración nacional, un sistema de caja única o de fondo unificado, según lo estime conveniente, a efectos de lograr un más eficiente aprovechamiento de los recursos financieros disponibles, sin que ello implique afectar los recursos propios de las entidades.

3.5. Sistema de contabilidad

El proyecto de ley establece un modelo contable, concebido básicamente como un sistema que tiene por finalidad informar sobre la gestión financiera pública en forma oportuna, confiable y eficiente, útil para sustentar las decisiones de los responsables de administrar las instituciones públicas e idóneo para facilitar las tareas de control y de auditoría, tanto internos como externos.

Las características fundamentales del sistema propuesto son:

a) Mantiene a la Contaduría General de la Nación como el órgano rector del sistema de contabilidad. Es necesario destacar que la República Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos en que la función gubernamental de registro contable está centralizada en una unidad técnica ad hoc, situada a un alto nivel dentro del Ministerio de Economía;

b) Otorga a la Contaduría General de la Nación competencias para dictar normas contables para todas las entidades del sector público nacional. Estas normas deben asegurar que el sistema sea único, común y uniforme, cuidando que lo que se prescriba pueda ser desarrollado e implantado por las entidades conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de sus respectivas direcciones.

nes. En esta materia le corresponde también a la Contaduría General de la Nación asesorar y asistir técnicamente a todas las jurisdicciones y entidades para la implantación de las normas que dicte;

c) Señala expresamente que el sistema estará basado en los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, viabilizando la aplicación de todo el conocimiento de la contabilidad general al sector público, en la medida en que ello sea aplicable;

d) Le asigna a la Contaduría General de la Nación la responsabilidad de llevar la contabilidad general de la administración central y de organizar y administrar un sistema de información financiera que permita conocer permanentemente la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial del sector público nacional en su conjunto;

e) Ordena a la Contaduría General de la Nación coordinar con las provincias la aplicación del sistema de información financiera que desarrolle, aspirando de esa manera a procesar datos de todo el sector público argentino;

f) Incorpora la novedad de asignar a la Contaduría General de la Nación, la elaboración de las cuentas económicas del sector público, de acuerdo con la metodología del sistema de cuentas nacionales. En este sentido, se reconoce a este sistema como el macromodelo que debe enmarcar todas las acciones que, en materia de normas y diseños contables, se establezcan para el sector público. La disponibilidad oportuna de las cuentas económicas de dicho sector permitirá que las áreas especializadas en análisis y política económica dispongan del sustento informativo institucional necesario y oportuno para mejorar la calidad de su actividad;

g) Establece que los sistemas a diseñarse deben permitir la integración de la información presupuestaria, del Tesoro, patrimonial y económica de las entidades, lo que supone básicamente que las transacciones se deben registrar una sola vez y de ese registro derivar todas las salidas que se requieran al sistema. Esto implica la eliminación de los tradicionales subsistemas del actual modelo de contabilidad gubernamental que originaban el múltiple registro de la misma transacción. El nuevo sistema asegura economía de registros, así como seguridad y homogeneidad en la información producida;

h) Elimina la atribución de ejercer el control interno de la hacienda pública por parte de la Contaduría General de la Nación, la que es asignada a la Sindicatura General de la Nación;

i) Indica que la contabilidad de todas las jurisdicciones y entidades debe estar orientada hacia la determinación de los costos de las operaciones públicas, lo que permitirá medir niveles de eficiencia y, en los casos que corresponda, aplicar precios y tarifas acordes con los costos reales. Esta orientación que marca el proyecto de ley supone una previa mejora de la actual disponibilidad de informaciones de base, fijando una meta que debe tenerse presente en el diseño de las normas contables que se establezcan;

j) Dispone que la Contaduría General de la Nación debe confeccionar los siguientes estados financieros, con la periodicidad que en cada caso se indica.

i) Estados contable-financieros de la administración central, en forma anual;

ii) Estados que muestren la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial de la administración nacional, de cada entidad descentralizada y del sector público en su conjunto, en forma permanente;

iii) La cuenta de inversión, que establece el artículo 67, inciso 7 de la Constitución Nacional, a elaborarse anualmente. Esta cuenta contendrá información sobre la gestión presupuestaria ejecutada por la administración nacional, estados contable-financieros de la administración central, datos sobre la gestión financiera consolidada del sector público y otras informaciones de interés para el Congreso. Se dispone, además, que la cuenta de inversión incorpore comentarios sobre el grado de efectividad y eficiencia de la gestión anual de las entidades públicas.

3.6 Sistema de control interno

Se reestructura la actual Sindicatura General de Empresas Públicas para elevar su ámbito de competencia a la totalidad del sector público. La Sindicatura se convierte, pues, en el órgano de control interno del Poder Ejecutivo nacional. Es, en realidad, el auditor del presidente, puesto que se lo hace depender directamente de él, única manera de asegurar la eficiencia de su desempeño. La figura de síndico general de la Nación y de los dos síndicos generales adjuntos previstos, surge de este proyecto con un indudable poder de control y auditoría, y de orientación de los sistemas de control interno y de evaluación a nivel de las jurisdicciones y entidades. Es necesario remarcar que el organismo actuará fundamentalmente con carácter de control preventivo —acorde con las modernas tendencias en la materia— y como orientador y coordinador de los sistemas de control interno y auditoría interna que se establecerán en todas las unidades del sector público nacional.

A diferencia de la Intervención General del Estado en España (que, si bien actúa con un elevado grado de autonomía, se encuentra situada dentro del esquema organizativo del Ministerio de Economía), el presente proyecto de Sindicatura General de la Nación, dependiente del presidente de la República, se equipará con la Secretaría de la Contraloría General de México, creada hace unos pocos años en dependencia directa del presidente de la República. Se asegura de esa manera el contacto directo del Ejecutivo con la gestión financiera de todo el sector público.

3.7 Sistema de control externo

El actual Tribunal de Cuentas experimenta un cambio fundamental en el enfoque de sus atribuciones para convertirlo en el auténtico organismo de auditoría ex-

terna del país: una Contraloría General de la Nación actuando en función *ex post*, denominación ésta preva- leciente en los países de la región y que se ha pre- ferido para el modelo propuesto sobre la tendencia anglosajona de oficina del auditor general (Canadá, entre otros) u oficina del contralor y auditor general (por ejemplo en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la India).

Este supremo organismo de control que se nutriría también con la información emanada del órgano de control interno del Ejecutivo cierra, de hecho, el círculo de la red de control del Estado nacional al reconocer, dentro de la división de poderes, la función de vigi- lancia que corresponde al Congreso sobre la gestión del Poder Ejecutivo.

A los efectos de que el órgano de control externo sea efectivo, se le reconoce una organización dinámica y empresarial, exento de decisiones colegiadas y ajeno a cualquier otra actividad que no se corresponda al de un organismo independiente de auditoría, control y evaluación.

La Contraloría General de la Nación se mantendrá estrictamente, como un órgano de auditoría y evalua- ción *ex post*, ágil y eficiente.

Por otra parte, la figura europea del Tribunal de Cuentas, y que implica juicios de cuentas y de res- ponsabilidades de los funcionarios públicos y controles previos sobre actos que corresponden legítimamente a la suprema dirección de los entes estatales, queda sus- tituida por el de una contraloría general con las ca- racterísticas señaladas. La nueva contraloría no enjui- cia ni persigue al funcionario prevaricador sino que, cuando se justifique, aportará las pruebas del presunto ilícito y pasará el caso al Poder Judicial, como corres- ponde en una división de poderes.

La Contraloría se encargará también de apreciar la eficiencia y economía con que se utilicen los recursos del Estado así como la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones del sector público nacional. Se incluye, también, en sus funciones el examen de la utilización de los fondos de la deuda y crédito público, pero no tendrá injerencia, como ex- presamente se señala en el caso del Reino Unido de Gran Bretaña, en juzgar o examinar el mérito de las políticas monetarias o de endeudamiento que adopte el Ejecutivo nacional. El órgano de control externo se en- cargará, igualmente, de seguir la evolución patrimonial de los funcionarios públicos de cierto rango mientras permanezcan en los respectivos puestos de confianza, como se observa rigurosamente, entre otros, en el caso de las contralorías de México, Colombia y Venezuela. El órgano de control externo propuesto se equiparará, en sus atribuciones y horizontes de responsabilidades, con esquemas reconocidos como eficientes internacio- nalmente, tales como los de Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América, Australia y Suecia.

Se prevé que el contralor general de la Nación, que sería asistido por tres subcontralores, sea nombrado por el Senado y que dure en el ejercicio de sus funciones durante seis (6) años, pudiendo ser reelegido. El me- canismo de enlace previsto entre la Contraloría General

de la Nación y el Congreso asegura, por otra parte, que el control financiero del Estado se enmarque den- tro del necesario control político.

En síntesis, el proyecto que se presenta a considera- ción representa un serio intento de modernizar la ad- ministración financiera y control del sector público na- cional, enmarcado dentro del proceso que ha acometido el Poder Ejecutivo nacional de reforma del Estado.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 632

CARLOS S. MENEM.
Domingo F. Cavallo

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—La presente ley establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional.

Art. 2º—La administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimien- tos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumpli- miento de los objetivos del Estado.

Art. 3º—En materia de control comprende las es- tructuras de control interno y externo del sector pú- blico nacional y el régimen de responsabilidad que es- tipula y que está asentado en la obligación de los fun- cionarios de rendir cuentas de su gestión.

Art. 4º—Son objetivos de esta ley y por lo tanto deberán tenerse presente para su interpretación y re- glamentación, los siguientes:

- a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economi- dad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos;
- b) Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional;
- c) Desarrollar sistemas que proporcionen al Po- der Ejecutivo nacional información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, útil para la direc- ción de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas;
- d) Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional, la im- plantación y mantenimiento de:
 - i) Un sistema contable adecuado a las nece- sidades del registro e información y acorde con su naturaleza jurídica y carac- terísticas operativas.
 - ii) Un eficiente y eficaz sistema de control interno financiero, económico y de gestión

sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y de la auditoría interna.

- iii) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad. Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con un personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se les asignen en el marco de esta ley.

- e) Instituir el sistema de control externo del sector público nacional.

Art. 5º — La administración financiera estará integrada por los siguientes sistemas, que deberán estar interrelacionados entre sí:

- Sistema presupuestario.
- Sistema de crédito público.
- Sistema de tesorería.
- Sistema de contabilidad.

Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector, que dependerá directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo nacional establecerá el órgano responsable de la coordinación de los sistemas que integran la administración financiera, el cual dirigirá y supervisará la implantación y mantenimiento de los mismos.

Art. 7º — La Sindicatura General de la Nación y la Contraloría General de la Nación serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente.

Art. 8º — Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, el que a tal efecto está integrado por:

- a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
- b) Empresas y sociedades del Estado, que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación

esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades.

Art. 9º — En el contexto de esta ley se entenderá por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio; y, por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades institucionales que componen la administración central:

- a) Poder Legislativo;
- b) Poder Judicial;
- c) Presidencia de la República, los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo nacional y la Contraloría General de la Nación.

Art. 10. — El ejercicio financiero del sector público nacional, a los efectos de los sistemas comprendidos en esta ley, comenzará el 1º de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año.

TITULO II

Del sistema presupuestario

CAPÍTULO I

Disposiciones generales y organización del sistema

SECCION I

Normas técnicas comunes

Art. 11. — El presente título establece los principios órganos, normas y procedimientos que regirán el proceso presupuestario de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público nacional sin excepción.

Art. 12. — Los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese período, en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

Art. 13. — Los presupuestos de recursos contendrán la enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio.

Las denominaciones de los diferentes rubros de recursos deberán ser lo suficientemente específicos como para identificar las respectivas fuentes.

Art. 14. — En los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos del sector público nacional, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento.

La reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria y los clasificadores de gastos y recursos que serán utilizados.

Art. 15. — Cuando en los presupuestos de las jurisdicciones y entidades públicas se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio presupuestario, se deberá incluir en los mismos información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física. La aprobación de los presupuestos que contengan esta información, por parte de la autoridad competente, implicará la autorización expresa para contratar las obras y/o adquirir los bienes y servicios, hasta por su monto total, de acuerdo con las modalidades de contratación vigentes.

SECCION II

Organización del sistema

Art. 16. — La Oficina Nacional de Presupuesto será el órgano rector del sistema presupuestario del sector público nacional.

Art. 17. — La Oficina Nacional de Presupuesto tendrá las siguientes competencias:

- a) Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;
- b) Formular y proponer al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera los lineamientos para la elaboración de los presupuestos del sector público nacional;
- c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones presupuestarias, y evaluación de los presupuestos de la administración nacional;
- d) Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado;
- e) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la administración nacional y proponer los ajustes que considere necesarios;
- f) Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del Estado y presentar los respectivos informes a consideración del Poder Ejecutivo nacional;
- g) Preparar el proyecto de ley de presupuesto general y fundamentar su contenido;
- h) Aprobar, juntamente con la Tesorería General, la programación de la ejecución del presupuesto de la administración nacional, preparada por las jurisdicciones y entidades que la componen;
- i) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del sector público nacional regidos

por esta ley y difundir los criterios básicos para un sistema presupuestario compatible a nivel de provincias y municipalidades;

- j) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la administración nacional e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación;
- k) Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por esta ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas;
- l) Las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.

Art. 18. — Integrarán el sistema presupuestario y serán responsables de cumplir con esta ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita la Oficina Nacional de Presupuesto, todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades del sector público nacional. Estas unidades son responsables de cuidar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan las autoridades competentes.

CAPÍTULO II

Del presupuesto de la administración nacional

SECCION I

De la estructura de la Ley de Presupuesto

Art. 19. — La Ley de Presupuesto General constará de tres títulos cuyo contenido será el siguiente:

Título I. — Disposiciones generales.

Título II. — Presupuesto de recursos y gastos de la administración central.

Título III. — Presupuesto de recursos y gastos de los organismos descentralizados.

Art. 20. — Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio financiero.

Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos.

El título I incluirá, asimismo, los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados.

Art. 21. — Para la administración central se considerarán como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante el período en cualquier organismo, oficina o agencia autorizada a percibir dineros a nombre de la administración central, el financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público, representen o no entradas de dinero efectivo al tesoro y los excedentes de ejercicios anteriores que se estime existente a la fecha de cierre del ejercicio an-

terior al que se presupuesta. No se incluirán en el presupuesto de recursos, los montos que correspondan a la coparticipación de impuestos nacionales.

Se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el período, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del Tesoro.

Art. 22. — Para los organismos descentralizados, la reglamentación establecerá los criterios para determinar los recursos que deberán incluirse como tales en cada uno de esos organismos. Los gastos se programarán siguiendo el criterio del devengado.

Art. 23. — No se podrá destinar específicamente el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender el pago de determinados gastos.

Sólo podrán ser afectados para fines específicos los siguientes ingresos:

- a) Los provenientes de operaciones de crédito público;
- b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado;
- c) Los que por leyes especiales tengan afectación específica.

SECCION II

De la formulación del presupuesto

Art. 24. — El Poder Ejecutivo fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto general.

A tales fines, las dependencias especializadas del mismo deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país y preparar una propuesta de prioridades que enmarque la política presupuestaria en general y los planes o programas de inversiones públicas, en particular.

Se considerarán como elementos básicos para iniciar la formulación de los presupuestos, el programa monetario y el presupuesto de divisas formulados para el ejercicio que será objeto de programación, así como la cuenta de inversión del último ejercicio ejecutado y el presupuesto consolidado del sector público del ejercicio vigente.

El programa monetario y el presupuesto de divisas serán remitidos al Congreso Nacional, a título informativo, como soporte para el análisis del proyecto de ley de presupuesto general.

Art. 25. — Sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados, y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Oficina Nacional de Presupuesto preparará el proyecto de Ley de Presupuesto General.

El proyecto de ley deberá contener, como mínimo, las siguientes informaciones:

- a) Presupuestos de recursos de la administración central y de cada uno de los organismos descentralizados, clasificados por rubros;
- b) Presupuestos de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada organismo descentrali-

zados, los que identificarán objetivos, producción y créditos presupuestarios;

- c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar;
- d) Resultados de las cuentas corriente y de capital para la administración central, para cada organismo descentralizado y para el total de la administración nacional.

El reglamento establecerá, en forma detallada, otras informaciones a ser presentadas al Congreso Nacional tanto para la administración central como para los organismos descentralizados.

Art. 26. — El Poder Ejecutivo nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados del Congreso, antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el artículo 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos.

Si el proyecto de Ley de Presupuesto General, presentado en el plazo fijado en el párrafo anterior, no fuere aprobado por el Congreso antes del 15 de diciembre de ese año, será puesto en vigencia por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 27. — Si el Poder Ejecutivo nacional no presentara en el plazo previsto en el artículo anterior el proyecto de Ley de Presupuesto General y al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el proyecto de presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que deberá introducir el Poder Ejecutivo nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados.

1. En los presupuestos de recursos:

- a) Eliminará los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente;
- b) Suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas;
- c) Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización;
- d) Estimaré cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio;
- e) Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.

2. En los presupuestos de gastos:

- a) Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos;

- b) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales;
- c) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios;
- d) Adaptará los objetivos y las cuantificaciones, en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

Art. 28. — El Congreso no podrá incrementar el total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional, sin la consiguiente aprobación del financiamiento respectivo.

SECCION III

De la ejecución del presupuesto

Art. 29. — Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de agregación que haya aprobado el Congreso, según las pautas establecidas en el artículo 25 de esta ley constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.

Art. 30. — Una vez aprobada la Ley de Presupuesto General por el Congreso, el Poder Ejecutivo nacional decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos.

La distribución administrativa del presupuesto de gastos consistirá en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la Ley de Presupuesto General. El dictado de este instrumento normativo implicará el ejercicio de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento.

Art. 31. — Se considera gastado un crédito y por lo tanto, ejecutado el presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto.

La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo y corresponderá al órgano rector del sistema la regulación de los demás aspectos conceptuales y operativos que garanticen su plena vigencia.

Art. 32. — Las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley están obligadas a llevar los registros de ejecución presupuestaria que les fije la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse la liquidación o el momento en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, por el lado de los gastos, además del momento del devengado, según lo establece el artículo precedente, las etapas de compromiso y del pago.

El registro del compromiso se utilizará como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y, el del pago, para reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.

A los efectos de su registro contable, se entenderá por compromiso el acto de autoridad competente, ajustado a las normas legales de procedimiento, que dé origen a una obligación de pagar una suma determinada de dinero, referible por su importe y concepto, a aquellos créditos. Exceptúanse del régimen señalado aquellos gastos cuyo monto sólo puede establecerse al momento de su devengamiento.

Art. 33. — No se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una finalidad distinta a la prevista.

Art. 34. — A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten los órganos rectores de los sistemas presupuestarios y de tesorería.

Dicha programación será ajustada y las respectivas cuotas aprobadas por los órganos rectores en la forma y para los períodos que se establezcan.

El monto total de las cuotas de compromisos fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante el mismo.

Art. 35. — Los órganos de los tres poderes del Estado y la Contraloría General de la Nación determinarán, para cada uno de ellos, los límites cuantitativos y cualitativos, mediante los cuales podrán contraer compromisos por sí, o por la competencia específica que asignen, al efecto, a los funcionarios de sus dependencias. La competencia así asignada será indelegable. La reglamentación establecerá la competencia para ordenar pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar que no estén expresamente establecidas en esta ley.

Art. 36. — Facúltase al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera a afectar los créditos presupuestarios de las jurisdicciones y organismos descentralizados, destinados al pago de los servicios públicos y de otros conceptos que determine la reglamentación.

Art. 37. — La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General que resulten necesarias durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.

Art. 38. — Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá determinar los recursos a utilizar para su financiamiento.

El Poder Ejecutivo dispondrá la incorporación de tales leyes a la Ley de Presupuesto General en vigencia y la autorización para gastar quedará comprendida en las respectivas normas de ejecución.

Art. 39. — El Poder Ejecutivo podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la Ley de Presupuesto General en los siguientes casos:

- a) Para las situaciones comprendidas en los artículos 6 y 23 de la Constitución Nacional.
- b) Para el cumplimiento de leyes electorales.
- c) Para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes;
- d) Para atender al socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor;
- e) Para actuar ante alteraciones del orden público que pongan en riesgo la seguridad del Estado.

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las previsiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables. Las autorizaciones así dispuestas se incorporarán al presupuesto general.

Art. 40. — Las sumas a recaudar que no pudieren hacerse efectivas por resultar incobrables, podrán ser declaradas tales por el Poder Ejecutivo nacional o los funcionarios que determine la reglamentación, una vez agotados los medios para lograr su cobro.

La declaración de incobrable no implicará la extinción de los derechos del Estado, ni de la responsabilidad en que pudiese incurrir el funcionario o empleado recaudador o cobrador, si tal situación le fuere imputable.

SECCION IV

Del cierre de cuentas

Art. 41. — Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente con independencia de la fecha en que se hubiere originado la obligación de pago o liquidación de los mismos.

Con posterioridad al 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

Art. 42. — Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelarán, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para este ejercicio. El reglamento establecerá los plazos y los mecanismos para la aplicación de estas disposiciones.

Art. 43. — Al cierre del ejercicio se reunirá información de los entes responsables de la liquidación y captación de recursos de la administración nacional y se procederá al cierre del presupuesto de recursos de la misma. Del mismo modo procederán los organismos ordenadores de gastos y pagos con el presupuesto de gastos de la administración nacional. Esta información, junto al análisis de correspondencia entre los gastos y la producción de bienes y servicios que preparará la Oficina Nacional de Presupuesto, será centralizada en la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la cuenta de inversión del ejercicio que, de acuerdo al artículo 95, debe remitir anualmente el Poder Ejecutivo nacional al Congreso.

SECCION V

De la evaluación de la ejecución presupuestaria

Art. 44. — La Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución de los presupuestos de la administración nacional tanto en forma periódica durante el ejercicio, como al cierre del mismo.

Para ello, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán:

- a) Llevar registros de información de la gestión física de la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes;
- b) Participar los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Oficina Nacional de Presupuesto.

Art. 45. — Con base en la información que señala el artículo anterior, en la que suministre el sistema de contabilidad gubernamental y otras que se consideren pertinentes, la Oficina Nacional de Presupuesto realizará un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos, interpretará las variaciones operadas con respecto a lo programado, procurará determinar sus causas y preparará informes con recomendaciones para las autoridades superiores y los responsables de los organismos afectados.

La reglamentación establecerá los métodos y procedimientos para la aplicación de las disposiciones contenidas en esta sección, así como el uso que se dará a la información generada.

CAPÍTULO III

Del régimen presupuestario de las empresas y sociedades del Estado

Art. 46. — Los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las empresas y sociedades del Estado aprobarán el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remitirán a la Oficina Nacional de Presupuesto, antes del 30 de septiembre del año anterior al que regirá. Los proyectos de presupuesto deberán expresar las políticas generales y los lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca el órgano coordinador de los sistemas de administración financie-

ra y la autoridad de la jurisdicción correspondiente; contendrán los planes de acción, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y permitirán establecer los resultados operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva.

Art. 47. — Los proyectos de presupuesto de financiamiento y de gastos deben estar formulados utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable.

Art. 48. — La Oficina Nacional de Presupuesto analizará los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades y preparará un informe destacando si los mismos se encuadran en el marco de las políticas, planes y estrategias fijados para este tipo de instituciones y aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de presupuesto si, a su juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones puede causar un perjuicio patrimonial al Estado o atentar contra los resultados de las políticas y planes vigentes.

Art. 49. — Los proyectos de presupuesto, acompañados del informe mencionado en el artículo anterior, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional de acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional aprobará, en su caso, con los ajustes que considere convenientes, antes del 31 de diciembre de cada año, los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, elevados en el plazo previsto en el artículo 48 de la presente ley, pudiendo delegar esta atribución en el ministro de Economía.

Si las empresas y sociedades del Estado no presentaren sus proyectos de presupuestos en el plazo previsto, la Oficina Nacional de Presupuesto elaborará de oficio los respectivos presupuestos y los someterá a consideración del Poder Ejecutivo nacional.

Art. 50. — Los representantes estatales que integran los organismos de las empresas y sociedades del Estado, estatutariamente facultados para aprobar los respectivos presupuestos, deberán proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 51. — El Poder Ejecutivo nacional hará publicar en el Boletín Oficial una síntesis de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, con los contenidos básicos que señala el artículo 46.

Art. 52. — Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado durante su ejecución y que impliquen la disminución de los resultados operativo o económico previstos, alteración sustancial de la inversión programada, o el incremento del endeudamiento autorizado, deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional, previa opinión de la Oficina Nacional de Presupuesto. En el marco de esta norma y con opinión favorable de dicha oficina, las empresas y sociedades establecerán su propio sistema de modificaciones presupuestarias.

Art. 53. — Al cierre de cada ejercicio financiero las empresas y sociedades procederán al cierre de cuentas de su presupuesto de financiamiento y de gastos.

Art. 54. — Se prohíbe a las entidades del sector público nacional realizar aportes o transferencias a empre-

sas y sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta ley, requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público.

CAPÍTULO IV

Del presupuesto consolidado del sector público nacional

Art. 55. — La Oficina Nacional de Presupuesto preparará anualmente el presupuesto consolidado del sector público, el cual presentará información sobre las transacciones netas que realizará este sector con el resto de la economía y contendrá, como mínimo, la siguiente información:

- a) Una síntesis del presupuesto general de la administración nacional;
- b) Los aspectos básicos de los presupuestos de cada una de las empresas y sociedades del Estado;
- c) La consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en agregados institucionales útiles para el análisis económico;
- d) Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el sector público nacional;
- e) Información de la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos que se estiman utilizar, así como la relación de ambos con los recursos financieros;
- f) Un análisis de los efectos económicos de los recursos y gastos consolidados sobre el resto de la economía

El presupuesto consolidado del sector público nacional será presentado al Poder Ejecutivo nacional antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo nacional será remitido para conocimiento del Congreso Nacional.

TÍTULO III

Del sistema de crédito público

Art. 56. — El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueben las operaciones específicas.

Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional o para reestructurar sus pasivos.

Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos de tipo corriente.

Art. 57. — El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en:

- a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito;

- b) La emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero;
- c) La contratación de préstamos con instituciones financieras;
- d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente;
- e) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías;
- f) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.

No se considera deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta ley.

Art. 58. — A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará en interna y externa y en directa e indirecta.

Se considerará deuda interna, aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por su parte, se entenderá por deuda externa, aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio.

La deuda pública directa de la administración central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal.

La deuda pública indirecta de la administración central es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía.

Art. 59. — Ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera.

Art. 60. — Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o en una ley específica.

La Ley de Presupuesto General debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:

- tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa;
- monto máximo autorizado para la operación;
- plazo mínimo de amortización;
- destino del financiamiento.

Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la Ley de Presupuesto General del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente.

Art. 61. — En los casos en que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa, antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá oírse la opinión del Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos.

Art. 62. — Cumplidos los requisitos fijados en los artículos 59 y 61 de esta ley, las empresas y sociedades del Estado podrán realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca la reglamentación. Cuando estas operaciones requieran de avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza de la administración central, la autorización para su otorgamiento debe estar prevista en la Ley de Presupuesto General o en una ley específica.

Art. 63. — El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera fijará las características y condiciones no previstas en esta ley, para las operaciones de crédito público que realicen las entidades del sector público nacional.

Art. 64. — Los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que cualquier ente público otorgue a personas ajenas a este sector requerirán de una ley. Se excluye de esta disposición a los avales, fianzas o garantías que otorguen las instituciones públicas financieras.

Art. 65. — El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazo y/o intereses de las operaciones originales.

Art. 66. — Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los que las realicen.

Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional.

Art. 67. — El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera tendrá la facultad de redistribuir o reasignar los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público, siempre que así lo permitan las condiciones de la operación respectiva y las normas presupuestarias.

Art. 68. — La Oficina Nacional de Crédito Público será el órgano rector del sistema de crédito público, con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público.

Art. 69. — En el marco del artículo anterior la Oficina Nacional de Crédito Público tendrá competencia para:

- a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera que, para

el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;

- b) Organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito;
- c) Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el sector público nacional;
- d) Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público;
- e) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como los de negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo el ámbito del sector público nacional;
- f) Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen para emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas;
- g) Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público se apliquen a sus fines específicos;
- h) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental;
- i) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento;
- j) Todas las demás que le asigne la reglamentación.

Art. 70. — El servicio de la deuda estará constituido por la amortización del capital y el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las operaciones de crédito público.

Los presupuestos de las entidades del sector público deberán formularse previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la deuda.

El Poder Ejecutivo nacional podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan en término el servicio de la deuda pública, el monto de dicho servicio y efectuarlo directamente.

Art. 71. — Se exceptúan de las disposiciones de esta ley las operaciones de crédito que realice el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria.

TITULO IV

Del sistema de tesorería

Art. 72. — El sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del sector público nacional, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.

Art. 73. — La Tesorería General de la Nación será el órgano rector del sistema de tesorería y, como tal,

coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el sector público nacional, dictando las normas y procedimientos conducentes a ello.

Art. 74. — La Tesorería General tendrá competencia para:

- a) Participar en la formulación de los aspectos monetarios de la política financiera que para el sector público nacional elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;
- b) Elaborar juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto de la administración nacional y programar el flujo de fondos de la administración central;
- c) Centralizar la recaudación de los recursos de la administración central y distribuirlos en las tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de las obligaciones que se generen;
- d) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, supervisar su ejecución y asignar las cuotas de las transferencias que éstos recibirán de acuerdo con la Ley General de Presupuesto;
- e) Administrar el sistema de caja única o de fondo unificado de la administración nacional que establece el artículo 80 de esta ley;
- f) Emitir letras del Tesoro, en el marco del artículo 82 de esta ley;
- g) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito del sector público nacional;
- h) Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución;
- i) Coordinar con el Banco Central de la República Argentina la administración de la liquidez del sector público nacional en cada coyuntura económica, fijando políticas sobre mantenimiento y utilización de los saldos de caja;
- j) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realicen las entidades del sector público nacional en instituciones financieras del país o del extranjero;
- k) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la administración central o de terceros, que se pongan a su cargo;
- l) Todas las demás funciones que en el marco de esta ley le adjudique la reglamentación.

Art. 75. — La Tesorería General estará a cargo de un tesorero general que será asistido por un subtesorero general. Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo. Para ejercer ambos cargos se requerirá título universitario en alguna de las ramas de las ciencias económicas y una experiencia en el área financiera o de control no inferior a cinco años.

Art. 76. — El tesorero general dictará el reglamento interno de la Tesorería General de la Nación y asignará funciones al subtesorero general.

Art. 77. — Funcionará una tesorería central en cada jurisdicción y entidad de la administración nacional. Estas tesorerías centralizarán la recaudación de las distintas cajas de su jurisdicción, recibirán los fondos puestos a disposición de las mismas y cumplirán los pagos que autorice el respectivo servicio administrativo.

Art. 78. — Los fondos que administren las jurisdicciones y entidades de la administración nacional se depositarán en cuentas del sistema bancario a la orden conjunta del jefe del servicio administrativo y del tesorero o funcionario que haga sus veces.

Art. 79. — Las embajadas, legaciones y consulados serán agentes naturales de la Tesorería General de la Nación en el exterior. Las embajadas y legaciones podrán ser erigidas en tesorerías por el Poder Ejecutivo. A tal efecto actuarán como agentes receptores de fondos y pagadores de acuerdo a las instrucciones que dote la Tesorería General de la Nación.

Art. 80. — El órgano central de los sistemas de administración financiera instituirá un sistema de caja única o de fondo unificado, según lo estime conveniente, que le permita disponer de las existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, en el porcentaje que disponga el reglamento de la ley.

Art. 81. — Los órganos de los tres poderes del Estado, la Contraloría General de la Nación y la autoridad superior de cada una de las entidades descentralizadas que conforman la administración nacional, podrán autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, con el régimen y los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.

A estos efectos, las tesorerías correspondientes podrán entregar los fondos necesarios con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores.

Art. 82. — La Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la Ley Presupuesto General. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se transformarán en deuda pública y deben cumplirse para ello con los requisitos que al respecto se establece en el título III de esta ley.

Art. 83. — Los organismos descentralizados, dentro de los límites que autorizan los respectivos presupuestos y previa conformidad de la Tesorería General de la Nación, podrán tomar préstamos temporarios para solucionar sus déficit estacionales de caja, siempre que cancelen las operaciones durante el mismo ejercicio financiero.

Art. 84. — El órgano central de los sistemas de administración financiera dispondrá la devolución a la Tesorería General de la Nación de las sumas acreditadas en las cuentas de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, cuando éstas se mantengan sin utilización por un período no justificado. Las instituciones financieras en las que se encuentran depositados

los fondos deberán dar cumplimiento a las transferencias que ordene el referido órgano.

TITULO V

Del sistema de contabilidad gubernamental

Art. 85. — El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas.

Art. 86. — Será objeto del sistema de contabilidad gubernamental:

- a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades;
- b) Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en la misma;
- c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean éstas internas o externas;
- d) Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales.

Art. 87. — El sistema de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características generales:

- a) Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional;
- b) Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y, a su vez, con las cuentas nacionales;
- c) Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del Tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas;
- d) Estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas;
- e) Estará basado en principios y normas de contabilidad de aceptación general, aplicables en el sector público.

Art. 88. — La Contaduría General de la Nación será el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, y como tal responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público nacional.

Art. 89. — La Contaduría General de la Nación estará a cargo de un contador general que será asistido por un subcontador general, debiendo ser ambos designados por el Poder Ejecutivo nacional. Para ejercer los cargos de contador general y de subcontador general, se requie-

rá título universitario de contador público y una experiencia posterior en materia financiero-contable en el sector público, no inferior a cinco (5) años.

Art. 90. — El contador general dictará el reglamento interno de la Contaduría General de la Nación y asignará funciones al subcontador general.

Art. 91. — La Contaduría General de la Nación tendrá competencia para:

- a) Dictar las normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público nacional. En ese marco prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y característica de los estados contables financieros a producir por las entidades públicas;
- b) Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por las entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información de su dirección;
- c) Asesorar y asistir técnicamente a todas las entidades del sector público nacional en la implantación de las normas y metodologías que prescriba;
- d) Coordinar el funcionamiento que corresponda instituir para que se proceda al registro contable primario de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones de la administración central y por cada una de las demás entidades que conformen el sector público nacional;
- e) Llevar la contabilidad general de la administración central, consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias y produciendo anualmente los estados contable-financieros, para su remisión a la Contaduría General de la Nación;
- f) Administrar un sistema de información financiera, que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria de caja y patrimonial, así como los resultados operativo económico y financiero de la administración central de cada entidad descentralizada y del sector público nacional en su conjunto;
- g) Elaborar las cuentas económicas del sector público nacional, de acuerdo con el sistema de cuentas nacionales;
- h) Preparar anualmente la cuenta de inversión contemplada en el artículo 67, inciso 7º de la Constitución Nacional y presentarla al Congreso Nacional.
- i) Mantener el archivo general de documentación financiera de la administración nacional;
- j) Todas las demás funciones que le asigne el reglamento.

Art. 92. — Dentro de los cuatro (4) meses de concluido el ejercicio financiero, las entidades del sector público nacional, excluida la administración central, deberán entregar a la Contaduría General de la Na-

ción, los estados contables financieros de su gestión anterior con las notas y anexos que correspondan.

Art. 93. — La Contaduría General de la Nación organizará y mantendrá en operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales, que permita reducir al mínimo posible los débitos y créditos existentes entre las entidades del sector público nacional.

Art. 94. — La Contaduría General de la Nación coordinará con las provincias la aplicación, en el ámbito de competencia de éstas, del sistema de información financiera que desarrolle, con el objeto de presentar información consolidada de todo el sector público argentino.

Art. 95. — La cuenta de inversión, que deberá presentarse anualmente al Congreso antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda tal documento, contendrá como mínimo:

- a) Los estados de ejecución del presupuesto de la administración nacional, a la fecha de cierre del ejercicio;
- b) Los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la administración central;
- c) El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta;
- d) Los estados contable-financieros de la administración central;
- e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos económicos y financieros.

La cuenta de inversión contendrá, además, comentarios sobre:

- a) El grado del cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto;
- b) El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública;
- c) La gestión financiera del sector público nacional.

Si al clausurarse el quinto período ordinario de sesiones posterior a su presentación, no existiere pronunciamiento del Congreso, la cuenta de inversión se considerará automáticamente aprobada.

TITULO VI

Del sistema de control interno

Art. 96. — Créase la sindicatura general de la Nación, órgano interno de control del Poder Ejecutivo nacional.

Art. 97. — La sindicatura general de la Nación es una entidad con personería jurídica y autarquía administrativa, dependiente del presidente de la Nación.

Art. 98. — Es materia de su competencia el control interno del sector público nacional, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica.

Art. 99. — Su activo físico estará compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado nacional, y por aquellos que le sean transferidos o adquiera por cualquier causa jurídica.

Art. 100. — El sistema de control interno del sector público nacional queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, que es órgano normativo de supervisión y coordinación, y por las unidades de auditoría interna a ser creadas en cada jurisdicción y en las entidades comprendidas en esta ley. Estas unidades dependerán, jerárquicamente, de la autoridad superior de cada organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la sindicatura.

Art. 101. — La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta ley, realizada por los auditores integrantes de la unidad administrativa de auditoría interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

Art. 102. — El modelo de control que aplique y coordine la sindicatura deberá ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.

Art. 103. — La autoridad superior de cada entidad comprendida en la presente ley será responsable del mantenimiento de un sistema adecuado de control interno, que incluye la práctica del control previo.

Art. 104. — Son funciones de la Sindicatura General de la Nación:

- a) Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la Contraloría General de la Nación;
- b) Emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades de auditoría interna, de las normas de auditoría interna;
- c) Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones;
- d) Vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría General de la Nación;
- e) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, incluyendo el control previo, facilitando el desarrollo de las actividades de la Contaduría General de la Nación;
- f) Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría interna;
- g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;

h) Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoría interna y acordadas con los respectivos responsables;

i) Atender los pedidos de asesoría que le formulen autoridades del Poder Ejecutivo nacional y de organismos del sector público, en materia de control y auditoría;

j) Formular directamente a los órganos del Poder Ejecutivo, recomendaciones para la mejora de su gestión administrativa y contable;

k) Poner en conocimiento del presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público;

l) Mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la utilización de sus servicios.

Art. 105. — La sindicatura queda facultada para contratar estudios de consultoría y auditoría bajo específicos términos de referencia, planificar y controlar la realización de los trabajos, así como cuidar de la calidad del informe final.

Art. 106. — Para el cumplimiento de sus funciones, podrá requerir de la Contaduría General de la Nación la información que le sea necesaria.

Art. 107. — La sindicatura general deberá informar.

- a) Al presidente de la Nación, sobre la gestión financiera y operativa del sector público nacional;
- b) A la Contraloría General de la Nación, sobre la gestión cumplida por los entes bajo fiscalización de la sindicatura, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos formulados por el órgano externo de control;
- c) A la opinión pública, en forma periódica.

Art. 108. — La Sindicatura General de la Nación estará a cargo de un funcionario denominado síndico general de la Nación. Será designado por el Poder Ejecutivo nacional y dependerá directamente del presidente de la Nación, con rango de secretario de Estado.

Art. 109. — Para ser síndico general de la Nación será necesario poseer título universitario en contabilidad o administración, y una experiencia en administración financiera y auditoría no inferior a los ocho (8) años.

Art. 110. — El síndico general será asistido por dos (2) síndicos generales adjuntos, quienes sustituirán a aquél en caso de ausencia, licencia o impedimento en el orden de prelación que el propio síndico general establezca.

Art. 111. — Los síndicos generales adjuntos deberán contar con calificaciones académicas y experiencia similares a la del síndico general y serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del síndico general.

Art. 112. — Serán atribuciones y responsabilidades del síndico general de la Nación:

- a) Representar legalmente a la Sindicatura General de la Nación, personalmente o por delegación o mandato;
- b) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y modificación de la estructura orgánico-funcional y el estatuto del personal;
- c) Designar personal con destino a la planta permanente y/o temporaria, así como promover, aceptar renunciaciones, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente y al estatuto que, en consecuencia, se dicte;
- d) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos, estacionales o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;
- e) Elevar anualmente a la consideración de la Presidencia de la Nación, el plan de acción y presupuesto de gastos para su posterior incorporación al proyecto de ley de presupuesto general;
- f) Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo, pudiendo redistribuir los créditos, sin alterar el monto total asignado;
- g) Licitación, adjudicar y contratar suministros y servicios profesionales, adquirir, vender, permutar, transferir, locar y disponer respecto de bienes muebles e inmuebles para el uso de sus oficinas conforme las necesidades del servicio, pudiendo aceptar donaciones con o sin cargo;
- h) Informar a la Contraloría General de la Nación de actos o conductas que impliquen irregularidades, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Art. 113. — Los síndicos generales adjuntos participarán en la actividad de la Sindicatura General, sin perjuicio de las responsabilidades de determinadas funciones y cometidos que el síndico general les atribuya conjunta o separadamente, con arreglo a la naturaleza de la materia o a la importancia o particularidades del caso. El síndico general, no obstante la delegación, conservará en todos los casos la plena autoridad dentro del organismo y podrá abocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas.

Art. 114. — En los casos en que el Estado tenga participación accionaria en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, la Sindicatura General de la Nación propondrá a los organismos que ejerzan los derechos societarios del Estado nacional la designación de los funcionarios que en carácter de síndicos integrarán las comisiones fiscalizadoras, de acuerdo con lo que dispongan sus propios estatutos.

También los propondrá el Poder Ejecutivo nacional en los casos en que deban asignarse síndicos por el ca-

pital estatal en las sociedades en que el Estado nacional, por sí o mediante sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, tengan participación igualitaria o minoritaria.

Art. 115. — La Sindicatura General de la Nación convendrá con las jurisdicciones y entidades que en virtud de lo dispuesto en esta ley queden alcanzados por su ámbito de competencia, la oportunidad y modalidades de la puesta en práctica del sistema instituido en esta ley.

TITULO VII

Del sistema de control externo

Art. 116. — Créase la Contraloría General de la Nación, órgano independiente de control del sector público nacional.

Art. 117. — La Contraloría General de la Nación es una entidad con personería jurídica propia, autárquica administrativa y funcional e independencia financiera. Funcionará como órgano técnico de apoyo y en jurisdicción del Congreso y se vinculará con éste a través de la Presidencia de la Cámara de Diputados. A fin de asegurar su independencia e imparcialidad, su plan de acción y presupuesto anual serán considerados por la correspondiente comisión del Congreso y una vez acordado, remitido al Poder Ejecutivo para su incorporación al proyecto de ley del presupuesto general.

Art. 118. — Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables-financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos.

Art. 119. — La Contraloría General de la Nación podrá extender su competencia, mediante resolución fundada, a las entidades de derecho público no estatales o de derecho privado, en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado nacional, o a las que éste se hubiere asociado o garantizado su solvencia, incluso aquellas a las que se les haya otorgado aportes o subsidios, para su instalación o funcionamiento.

Art. 120. — Su activo físico estará compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado nacional y por aquéllos que les sean transferidos o adquiera por cualquier causa jurídica.

Art. 121. — Son funciones de la Contraloría General de la Nación:

- a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado;
- b) Realizar auditorías financieras, de legalidad y de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como evaluaciones de programas, pro-

yectos y operaciones. Estos trabajos podrán ser realizados directamente o mediante la contratación de estudios profesionales de auditoría independiente;

- c) Auditar, por sí o mediante estudios profesionales de auditoría independiente, a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito, conforme con los acuerdos que, a estos efectos, se llegue entre la Nación Argentina y estos prestatarios;
- d) Examinar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, preparados al cierre de cada ejercicio por la Contaduría General de la Nación;
- e) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes específicos que sean necesarios para formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento. A tales efectos puede solicitar al Ministerio de Economía y al Banco Central, la información que estime necesaria en relación a los convenios de endeudamiento interno y externo;
- f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina, independientemente de cualquier auditoría externa anual que pueda ser contratada con una calificada firma de auditoría privada, por la citada institución financiera oficial;
- g) Realizar análisis especiales de actos y contratos de significación económica, por sí o a petición de las Cámaras del Congreso;
- h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contable-financieros, así como del grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuestos de empresas y sociedades del Estado;
- i) Mantener registro patrimonial de los funcionarios públicos y disponer investigaciones dirigidas a verificar enriquecimientos indebidos u otras irregularidades que se presuman como cometidas por aquéllos. A tal efecto, todo funcionario público con rango de ministro, secretario, subsecretario o integrante de directorios de empresas y sociedades del Estado, está obligado a presentar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de asumir su cargo o de la sanción de la presente ley, una declaración jurada patrimonial, con arreglo a las normas y requisitos que disponga el registro, la que deberá ser actualizada anualmente y al cese de sus funciones.

Art. 122. — Para el desempeño de estas funciones, la contraloría general podrá:

- a) Realizar todo acto, contrato y operación que se relacionen con su misión;
- b) Exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán obligadas a

suministrarle los datos, documentos, antecedentes, e informes relacionados con la materia controlable.

Además, deberá:

- a) Presentar al Congreso de la Nación, antes del 30 de junio de cada año, la memoria de su actuación;
- b) Denunciar fundamenta'mente, ante la justicia, los hechos y actos presuntamente ilícitos o irregulares que afecten al patrimonio nacional, de los que tuviere conocimiento en el desempeño de sus funciones;
- c) Dar a publicidad aquellos informes que disponga el Congreso, o cuya publicación considere de interés general.

Art. 123. — La actividad de fiscalización a cargo de la Contraloría General de la Nación, deberá sustentarse en una planificación anual efectuada sobre la base de la aplicación de técnicas en las cuales se atiendan preferentemente los conceptos de riesgo de auditoría e importancia relativa.

Art. 124. — La Contraloría General de la Nación, estará a cargo de un contralor general, designado por el Senado sobre la base de una terna de profesionales que le someterá el Poder Ejecutivo nacional

Art. 125. — Para ser contralor general, se necesita ser argentino, con título universitario en el área de ciencias económicas, con probada especialización en administración financiera y auditoría y una experiencia no inferior a ocho (8) años en el sector público.

Art. 126. — Será asistido por tres (3) subcontralores, designados por el Senado a propuesta del contralor general. Para ser subcontralor rigen los mismos requisitos que para el contralor.

Art. 127. — El contralor general será designado por un lapso de seis (6) años y podrá ser reelegido. El primer contralor concluirá su mandato a la mitad del período presidencial siguiente a la sanción de esta ley.

Los subcontralores serán designados por un lapso de seis (6) años y serán renovados uno cada dos (2) años. Al nombrarse los primeros subcontralores se determinará por sorteo quién ejercerá el cargo por dos (2) años, el que lo ejercerá por cuatro (4) y el que permanecerá por todo el período.

Art. 128. — El contralor general y los subcontralores podrán ser removidos, en casos de grave inconducta o manifiesto incumplimiento de sus deberes por los procedimientos que establezca el Congreso.

Art. 129. — El contralor general, o su reemplazante legal transitorio, es el representante legal de la contraloría general. Son sus atribuciones y deberes:

- a) Conformar el plan anual de acción y el proyecto de presupuesto de la entidad;
- b) Establecer la estructura orgánica, dictar las normas internas, atribuir las facultades y responsabilidades de los funcionarios, así como la delegación de autoridad;

- c) Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoría externa, a ser utilizadas por la entidad. Tales criterios y las normas derivadas, deberán atender un modelo de control y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros, de legalidad y de economía, de eficiencia y eficacia;
- d) Licitar, adjudicar, adquirir suministros, contratar servicios profesionales, vender, permutar, transferir, locar y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la entidad, pudiendo aceptar donaciones con o sin cargo;
- e) Designar el personal y atender las cuestiones referentes a éste, con arreglo a las normas internas en la materia, en especial cuidando de que exista una equilibrada composición multidisciplinaria que permita la realización de auditorías y evaluaciones integradas de la gestión pública;
- f) Designar representantes y jefes de auditorías especiales;
- g) En general, resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de la entidad;
- h) Dirigirse directamente a las autoridades nacionales.

Art. 130. — Es deber y responsabilidad de los subcontralores colaborar con el contralor en el desempeño de las tareas de éste, asumiendo directamente aquellas que les sean expresamente delegadas.

Art. 131. — No podrán ser designados contralor o subcontralor personas que se encuentren inhabilitadas, en estado de quiebra o concursadas civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenadas en sede penal. Tampoco podrán ser designados quienes en los cinco (5) años anteriores hubieren desempeñado el cargo de presidente de la Nación, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional, presidente, director o miembro de los órganos de administración de organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado.

Art. 132. — El control de las actividades de la Contraloría estará a cargo del Congreso, en la forma que éste lo establezca.

TÍTULO VIII

Disposiciones varias

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 133. — Con la entrada en vigencia de la presente ley quedarán derogadas todas las normas que hubieren establecido exclusiones al control y fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Sindicatura General de Empresas Públicas.

Art. 134. — Invítase a las provincias y municipios a establecer en sus respectivos ámbitos, sistemas similares y compatibles con los previstos en la presente ley.

CAPÍTULO II

Disposiciones transitorias

Art. 135. — Las disposiciones contenidas en esta ley deberán tener principio de ejecución a partir del primer ejercicio financiero que se inicie con posterioridad a la sanción de la misma.

Art. 136. — El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, presentará al Congreso un proyecto de ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y otro que organice la administración de bienes del Estado.

Art. 137. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un plazo de noventa (90) días, a partir de la fecha de su promulgación.

CAPÍTULO III

Disposiciones finales

Art. 138. — Se derogan los siguientes ordenamientos legales:

- a) Decreto ley 23.354 del 31 de diciembre de 1956, ratificado por ley 14.467 (Ley de Contabilidad), con excepción de sus artículos 51 a 54 inclusive (capítulo V - De la gestión de bienes del Estado) y 55 a 64 inclusive (capítulo VI - De las contrataciones);
- b) Ley 21.801, reformada por la ley 22.639, que crea la Sindicatura General de Empresas Públicas;
- c) Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto, en lo que se oponga a la presente ley;
- d) Todas las demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 139. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Domingo F. Cavallo.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

II

SENADO

2

Buenos Aires, 17 de abril de 1991.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

En el juicio político seguido al señor juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 35 de la Capital Federal, doctor Alberto Oscar Nicolsia, me dirijo a usted para comunicarle que el Honorable Senado, en sesión de tribunal de fecha 10 del corriente, ha dictado la siguiente resolución: